

C.A. de Santiago

Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Gustavo Parraguez Gamboa, en representación de AFP CUPRUM S.A. (en adelante CUPRUM), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 inciso segundo del DFL N°101, del Ministerio del Trabajo, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución N° 27, de 8 de septiembre de 2020, de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (en adelante la SP) la que resolvió el proceso sancionatorio iniciado en contra de su representada por medio del Oficio Reservado de Cargos N°1969, de 27 de enero de 2020, aplicando una multa a beneficio fiscal de 2.000 UF.

Luego, hace referencia al funcionamiento del proceso de pensiones y expresa que el año 2018 la SP y la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la CMF) iniciaron un proceso de investigación y supervisión de intermediación y ventas de rentas vitalicias y retiros programados producidas en los cuatro años anteriores que hubieran sido efectuados por asesores previsionales y agentes de ventas de compañías de seguros de vida, y se logró determinar que ciertos asesores previsionales y agentes de ventas habían incurrido en prácticas irregulares con el objeto de acelerar el proceso de aceptación de las ofertas de montos de pensión.



Agrega que, la irregularidad había consistido en adulterar la copia del documento denominado **Certificado de Ofertas** que recibe el agente de ventas o asesor previsional en su calidad de partícipe del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, documento conocido como SCOMP, para hacerlas pasar por el original.

En este contexto la SP y la CMF determinaron que entre el 1 de julio de 2014 y 30 de junio de 2018 se habían efectuado 6.015 aceptaciones de ofertas de montos de pensión que podían calificarse como irregulares, correspondiendo 696 casos a afiliados o beneficiarios de CUPRUM, de los cuales 298 habrían realizado la aceptación de oferta en las oficinas de su representada.

Expresa que, cumplió cabalmente con los requerimientos de información realizados por los organismos fiscalizadores mediante las cartas GG/1640/2018 y GG/1640/2018-S, de fechas 13 y 21 de agosto de 2018. La fiscalización iniciada por la SP el 3 de agosto de 2018 concluyó en la formulación de cargos.

Con fecha 27 de enero de 2020 la SP formuló los siguientes cargos a su representada:

“UNO) Infracción a lo establecido en el primer y segundo párrafo del Capítulo VII, letra E, Título II del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigente a la fecha de los hechos contravencionales.



DOS) Infracción a lo establecido en el número 15, del Capítulo II, Título VI, Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigente a la fecha de los hechos contravencionales y

TRES) Infracción al séptimo párrafo del Capítulo VII, letra E, Título II del Libro III y número 1, letra F, Título II del Libro III, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigente a la fecha de comisión de los hechos en relación al artículo 61 bis, inciso octavo, del DL N° 3.500 de 1980 y segundo párrafo de la letra C, Título II, Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.”

Por su parte, CUPRUM presentó sus descargos el 11 de febrero de 2020, complementados el 12 de febrero de 2020 solicitando se dejara sin efecto o, en subsidio, se redujera la sanción aplicable al mínimo legal.

El 8 de septiembre de 2020 la SP resolvió que había operado la prescripción respecto de una parte de los antecedentes y entendió que debía sancionar únicamente los hechos ocurridos con posterioridad al 1 de octubre de 2016.

Con fecha 15 de septiembre de 2020 interpuso recurso de reposición que fue rechazado mediante la resolución impugnada alegando que supuestamente no había elementos que justifiquen modificar la resolución anterior.

En cuanto a la reclamación, señala lo siguiente:

i.- que la resolución impugnada se dictó habiendo expirado el plazo del procedimiento administrativo puesto que



su emisión se produjo una vez que había vencido el plazo legal para el desarrollo del procedimiento administrativo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, puesto que éste se inició el 3 de agosto de 2018 y se resolvió el 8 de septiembre de 2020, por lo que se debió aplicar la presunción establecida por el *silencio administrativo* y desestimar las sanciones;

ii.- que la sanción impuesta a CUPRUM, corresponde a conductas desarrolladas por terceros ajenos a aquella y que su representada no es parte del fraude investigado. Esgrime que el fundamento legal que se invoca para sancionarla dice relación con el artículo 61 bis del DL 3500, pues sobre las AFP recae la obligación de velar por el adecuado comportamiento de los actores del sistema. Normativa que apunta a verificar información para proteger al afiliado y desconoce el principio de presunción de inocencia pues la generación o emisión de documentos que se falsificaron o adulteraron no corresponde a su representada, a los cuales no se incorporaba mecanismo electrónico de verificación o control y tampoco se acreditó perjuicio a los afiliados ni denuncias o reclamos de parte de estos; y

iii.- que la SP no valoró conforme a las reglas de la sana crítica, las declaraciones de los ex asesores previsionales en cuyo mérito fundó la resolución impugnada y que fueron emitidas en contextos distintos al del procedimiento sancionatorio dirigido en contra de CUPRUM, y que, en su mayoría, ni siquiera hicieron referencia a CUPRUM.



Agrega que este proceder se encuentra manifiestamente en contra de las reglas de la sana crítica y pugna también con el principio de motivación de todo acto administrativo, aspecto de la máxima relevancia cuando se trata de un acto administrativo terminal que impone sanciones al regulado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11, 17 f) y 41, todos de la ley N° 19.880, corresponde que este reclamo sea acogido.

En cuanto al fondo, sobre el primer cargo que la Superintendencia tiene por acreditado consiste en que habría aceptado trámites de pensión realizados con certificados falsificados, refiere que la normativa vigente no contiene las obligaciones que se pretende imponer a su representada. Agrega que los hechos están tomados de otros procedimientos que fueron instruidos respecto de asesores previsionales y concluye que la AFP CUPRUM debe ser considerada responsable pues debió haber sido capaz de detectar la adulteración de los certificados e invoca el inciso octavo del artículo 61 bis del DL 3500, sin embargo, su gestión no corresponde a la de un fiscalizador o supervisor, sino como partícipe del sistema verificar que los montos de pensión correspondían a aquellos formulados por las compañías, la individualización de aquellas y que las clasificaciones de riesgo que se informaban fueran efectivas, todo lo cual fue efectuado.

Sobre el segundo cargo, la conducta que se reprocha consiste en la aceptación del trámite de pensión sin el



certificado de oferta ni su correspondiente respaldo en el archivo previsional. Llama la atención que no se consideró la cuestión relativa a que no se produjeron perjuicios a los afiliados ni a sus beneficiarios, transgrediendo los principios básicos del derecho administrativo y los elementos fundamentales del ordenamiento jurídico.

Sobre el tercer cargo indica que este debe ser dejado sin efecto porque vulnera el principio *non bis in idem* pues apunta a que su representada debió haber contado o aplicado mecanismos de verificación y control de la consistencia de la información del sistema. Lo que se está haciendo es volver a sancionar a partir de los mismos hechos que se invocaron para fundamentar el primer cargo.

En subsidio, solicita se rebaje la sanción impuesta a censura. La resolución impugnada únicamente considera las circunstancias agravantes y no las atenuantes. No considera la colaboración sustancial pues la AFP respondió a las solicitudes de información en tiempo y forma, en cuanto a la gravedad de la infracción reitera la alegación de falta de daño y riesgo del bien jurídico protegido. Por último, más allá de mencionar una serie de agravantes no expresa con claridad el método por el cual realizó la determinación exacta de la pena y ello se opone al principio de transparencia contenido en el artículo 16 de la Ley N°19.880.

En relación al criterio de gravedad de la conducta imputada, la SP estimó que las infracciones son de carácter



grave ya que habrían sucedido durante un largo período de tiempo, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en cuanto a que no es el único ni principal criterio vinculándolo con la trascendencia o peligro. En el caso, la propia Superintendencia reconoce en la resolución impugnada que no es posible determinar si hubo o no perjuicio para los pensionables. Tampoco consta en el procedimiento que los hechos imputados hayan derivado en un beneficio para la AFP sino que constituyen un fraude realizado por un tercero en su propio beneficio que se traducía en tener acceso al pensionable antes que otros agentes.

En relación al criterio de participación de la conducta la Superintendencia estima erróneamente que actuó en calidad de autor, pero en el caso, como ya explicó su representada jamás tuvo conocimiento de las adulteraciones.

En relación al criterio de colaboración durante la investigación se afirma que no la hay puesto que la AFP se habría limitado a cumplir su deber, sin embargo colaboró ampliamente facilitando antecedentes, realizando levantamiento de datos y procesándolos cada vez que fue requerida.

Pide se deje sin efecto la resolución impugnada y en su lugar se desestimen los cargos formulados o en subsidio se rebaje la sanción a la pena de censura o bien a la mínima que determine conforme a derecho.



Segundo: Que evacua informe el abogado Manuel Bustos Castillo, Jefe del Departamento Judicial y de Cumplimiento de la Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad con costas, por las razones que pasa a exponer.

En forma previa hace una relación detallada de los antecedentes y la documentación recabada durante los procesos de fiscalización relativos a los Certificados de Ofertas de montos de pensión originales. Luego cita las normas jurídicas aplicables al asunto.

En cuanto al fondo del reclamo hace presente que la CUPRUM omite elementos relevantes sobre el funcionamiento del sistema para limitar o excluir su responsabilidad sobre los hechos sancionados. Esta por mandato legal es quien debe garantizar y responder por el buen funcionamiento del sistema, no obstante, la supervisión de las Superintendencias. Por tanto, es incorrecto que sea un simple usuario del sistema.

Sobre la alegación de que la resolución impugnada se basa en la conducta de terceros ajenos, aclara que es responsabilidad de la AFP verificar que la oferta seleccionada corresponda a la registrada en el sistema, así como la autenticidad del certificado de saldo y del certificado de oferta original. Además señala que al momento de suscribir el formulario mencionado el consultante deberá presentar la aceptación de la oferta, el certificado de ofertas original y la cotización externa, si correspondiere. A mayor abundamiento

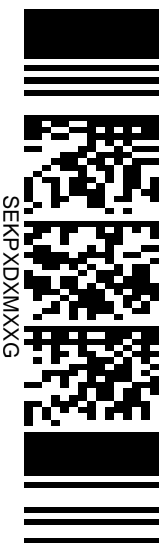


las normas señalan que el certificado de ofertas original será el documento mediante el cual el consultante acreditará la recepción de la información del sistema.

Aclara que estos sí contaban con un mecanismo de verificación o control que permitía una revisión más precisa y detallada que era el código de barras incorporado en la caratula.

En cuanto a que la resolución sanciona bajo una lógica de responsabilidad objetiva señala que la norma establece que la responsabilidad por la operación del sistema siempre será de las Compañías y de los Administradores y que éstos deberán establecer mecanismos de verificación de consistencia de la información entregada por el sistema y cualquier error o incumplimiento que afecte a los afiliados o sus beneficiarios será responsabilidad de la entidad correspondiente. Por lo tanto, la informante no ha empleado la responsabilidad objetiva para sancionar al reclamante, sino que de los elementos de prueba que contaba la SP y, los descargos y la prueba rendida por la Administradora, es que pudo acreditar la falta de diligencia de aquélla. En el caso, el principio de culpabilidad se cumple con la comprobación que la acción constitutiva de infracción resulte atribuible al infractor.

En cuanto a la supuesta expiración del plazo del procedimiento administrativo aclara que informó a la AFP reclamante con fecha 27 de enero de 2020 la apertura de un expediente de investigación en su contra (rol N°08-C-2020)

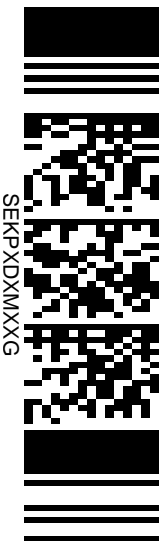


formulando cargos y el 23 de julio de 2020 resolvió ampliar el plazo, en consecuencia el plazo en comento expiraba el 27 de octubre de 2020 por lo que la resolución de 8 de septiembre de 2020 fue emitida dentro de plazo.

En cuanto a las alegaciones al primer cargo aclara que es deber de la reclamante recibir el certificado respectivo verificando la veracidad y el elemento de originalidad utilizando los mecanismos que contiene el mismo. No es correcto que no pudo hacer nada para impedir que se materializara el fraude pues el asesor no utilizó herramientas sofisticadas para adulterar documentos sino una aplicación descargada de internet. Lo anterior es de suma gravedad ya que da cuenta del total abandono de sus deberes en dicha materia, ya que el mecanismo contenido en los certificados, correspondiente al código de barras, existe desde el año 2005.

En cuanto a las alegaciones al segundo cargo refiere que la AFP CUPRUM no hace más que reconocer el actuar contravencional innovando con un concepto que no está contenido en la regulación, que es el supuesto perjuicio que debiera existir para sancionar su actuar irregular. El argumento de la falta de perjuicio carece de sustento, ya que el uso del archivo previsional para la constatación o comprobación de la historia previsional del afiliado es contingente, el que puede ser requerido muchos años después.

En cuanto a las alegaciones sobre el tercer cargo, la reclamante insiste en considerar que la resolución impugnada



habría infringido el principio *non bis in ídem*, lo cual deberá ser desestimado, por cuanto, como se señaló, las normas infringidas por CUPRUM contienen conductas precisas y claramente distinguibles entre sí, respecto de las cuales ha adquirido la convicción de su verificación. Aquí hay solo una sanción, no múltiples sanciones. En la especie, no existe identidad de hecho dado que, como fue expuesto en el acto administrativo, ésta no se agota en los presupuestos fácticos que fundan las diversas imputaciones, sino que debe acudir y realizarse en función de los tipos de hechos infraccionales que concurren al caso. De este modo, la reclamante desatendió obligaciones legales diversas, lo cual hace evidente la improcedencia y extrema liviandad de su alegación. Respecto de los tres cargos el bien jurídico protegido en cada caso es diverso.

Respecto a la alegación subsidiaria de la reclamante que dice relación con la falta de consideración de circunstancias atenuantes, apoyándose en el criterio de gravedad de la conducta imputada, puesto que las contravenciones realizadas por CUPRUM han generado un efecto pernicioso en el sistema de pensiones.

En relación al criterio de participación en la conducta la reclamante participó directamente en los hechos contravencionales como autor de los mismos, respecto de deberes que le son atribuidos a ésta y no a otra persona o



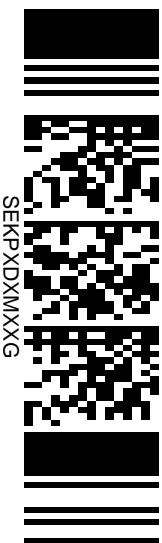
entidad, participación que se encuentra debidamente acreditada y desarrollada en la resolución sancionatoria.

En relación al criterio de colaboración durante la investigación, estima que no hubo colaboración del reclamante a la actividad investigadora de la SP que considera para graduar la sanción, sino que se limitó a dar cumplimiento de su deber legal de cumplir con lo instruido, sin observarse una actividad proactiva en aportar antecedentes adicionales.

En relación al criterio de reiteración de la conducta refiere que la cantidad de casos involucrados dan cuenta de una reiteración de la conducta que como consta en el expediente de investigación ocurrió a lo menos entre los años 2013 y 2018 que en virtud del instituto de la prescripción se redujeron a los años 2016, 2017 y 2018.

La multa aplicada fue de 2000 UF y agrega que el artículo 17 N° 2 DFL N°101 de 1980 faculta a la SP para aplicar multas hasta por 15000 UF, sin perjuicio de la aplicación del 30% de monto de la operación o contrato, regla que no fue aplicada. Lo anterior da cuenta que aplicó el 16,66% de la total a que está facultada.

Por último, señala el informe que en atención al proceder de la reclamante durante un periodo extenso de tiempo, con falta de diligencia y cuidado, se trata de acciones y omisiones de gravedad, puesto que las contravenciones de AFP CUPRUM S.A. han generado un efecto pernicioso en el Sistema de Pensiones, al haber aceptado documentos



prohibidos en la norma y al haber restado en una de las etapas y procesos más relevantes de la vida previsional de una persona el elemento de seguridad del sistema, circunstancia que ameritó ser sancionada.

Tercero: Que los fundamentos de la reclamación dirigida en contra de la Resolución N°27, de 8 de septiembre de 2020, de la SP que resuelve el proceso sancionatorio relativo certificados de ofertas de montos de pensión originales e impone a AFP CUPRUM una multa a beneficio fiscal de 2000 UF son los siguientes:

- 1.- la resolución impugnada se basa en la conducta de terceros ajenos a la AFP CUPRUM, por cuanto esta no es parte del fraude investigado;
- 2.- la resolución sanciona a AFP CUPRUM bajo una lógica de responsabilidad objetiva, que además de errada es improcedente, pues no indica cómo, cuándo y porque se habría acreditado la supuesta culpa en los hechos, y
- 3.- la resolución se habría dictado una vez que expiró el plazo para el desarrollo del Procedimiento Administrativo.

En cuanto a la primera de las alegaciones antes indicada, no se advierte la falta denunciada por cuanto resulta indiscutible que CUPRUM no es tercero ajeno, no es un usuario del sistema, sino que uno de los actores del mismo, pues de acuerdo a la normativa legal vigente, le asisten obligaciones como garantizar y responder por el buen funcionamiento del sistema, debiendo corroborar que la oferta



seleccionada sea la real del sistema, así como velar por la autenticidad del certificado de saldo y del certificado de oferta original.

En relación con la segunda alegación impetrada, que se haya sancionado bajo un estatuto de responsabilidad objetiva, no es efectivo pues en el procedimiento sancionatorio se acreditó la falta de diligencia y abandono de deberes de CUPRUM, de manera que el principio de culpabilidad se cumple con la comprobación que la acción constitutiva de infracción resulta atribuible al infractor.

En cuanto a la tercera ilegalidad impetrada, es decir, expiración del plazo, consta que con fecha 27 de enero de 2020 se abrió expediente de investigación en contra de la reclamante y se resolvió ampliar dicho plazo con fecha 23 de julio de 2020, expirando el mismo el 27 de octubre de 2020, dictándose la resolución impugnada con fecha 7 de septiembre de 2020, es decir, dentro de plazo, por lo que no es extemporánea.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo del asunto planteado, en el primer cargo formulado, era deber del reclamante recibir el certificado respectivo verificando su veracidad, sin embargo aceptó trámites de pensión realizados con Certificados falsificados y que habría concluido los respectivos procedimientos de selección de monto de pensión a partir de dichos certificados falsificados -con infracción a lo establecido en el primer y segundo párrafo del Capítulo VII, letra E, Título II



del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones vigente a la fecha de los hechos contravencionales-.

En cuanto a este cargo, como ya se ha expuesto, la reclamante adujo que era un hecho de tercero no imputable a su parte, pero esta infracción no constituye hecho de tercero, pues la AFP CUPRUM es partícipe del sistema y debió haber sido capaz de detectar la adulteración de los Certificados, pues la normativa indica que la responsabilidad del sistema siempre será de las Compañías Aseguradoras y Administradoras de Fondo de Pensiones, por lo que debía contar con mecanismos de verificación o haber utilizado el ya existente como es el código de barras registrado desde el año 2005. En consecuencia los hechos de cargo formulados son precisamente aquellos que se tuvieron por establecidos.

Quinto: Que, en lo que dice relación al segundo cargo, consiste en el reproche de la conducta de aceptación del trámite de pensión sin el Certificado original ni su correspondiente respaldo en el archivo previsional, infracción a lo establecido en el número 15, del Capítulo II, Título VI, Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigente a la fecha de los hechos contravencionales.

Alega la reclamante que no se produjeron perjuicios, es decir, reconoce el actuar contravencional pero le agrega requisitos que no están en la regulación.

Sin embargo, atendido los antecedentes no es posible sostener como lo indicó la reclamada, si se han verificado o no



perjuicios, solo que no hay constancia de los mismos. Por lo demás, la falta de perjuicios no es un argumento válido por cuanto el uso del archivo previsional para la constatación o comprobación de la historia previsional del afiliado es contingente, el que puede ser requerido muchos años después. En consecuencia, la infracción imputada se configura con los hechos acreditados que dicen relación con el cargo formulado.

Sexto: Que, en cuanto al tercer cargo, la reclamante solicita se deje sin efecto la resolución impugnada porque se vulnera el principio del *non bis In idem*, pues la misma conducta es sancionada dos o más veces en protección del mismo bien jurídico -Infracción al séptimo párrafo del Capítulo VII, letra E, Título II del Libro III y número 1, letra F, Título II del Libro III, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigente a la fecha de comisión de los hechos en relación al artículo 61 bis, inciso octavo, del DL N° 3.500 de 1980 y segundo párrafo de la letra C, Título II, Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Cabe señalar que esta Corte estima sobre este punto que, es efectivo lo señalado por la reclamante, puesto que las normas imputadas como infringidas por CUPRUM derivan de un mismo hecho, que es la falta del certificado de ofertas original en el proceso de determinación de pensiones de jubilación.

Por lo que se ha violentado dicho principio al condenar simultáneamente por la infracción a tres normas sancionatorias



que tienen el mismo fundamento o base racional, como se ha expresado.

Séptimo: Que la reclamante formulo' una petición subsidiaria, que se rebaje la sanción impuesta, puesto que en su concepto para determinar la gravedad de la infracción la resolución impugnada solo considero' las circunstancias modificatorias agravantes, no así las atenuantes.

En cuanto a este punto se puede señalar que la SP explico' pormenorizadamente los criterios considerados para determinar la gravedad de la infracción, es así que atendio' al criterio de gravedad de la conducta, puesto que las infracciones imputadas a la AFP CUPRUM eran de tal entidad porque habrían sucedido en un largo período de tiempo con falta de diligencia y cuidado, además de haber generado efectos perniciosos en el Sistema de Pensiones, pues la AFP CUPRUM acepto' documentos adulterados, que son los que la norma busca evitar y evidenciaron la falta de mecanismos de verificación sobre un proceso significativo, lo que genera un grave efecto pues minan la confianza en el sistema.

En cuanto al criterio de participación de la conducta aplicado, no puede desconocerse de manera alguna que la reclamante participo' directamente en las acciones y omisiones contravencionales como autor de los mismos, respecto de deberes que le son atribuidos a ésta, participación que se encuentra absolutamente desarrollada en la resolución sancionatoria.



En cuanto al criterio de colaboración durante la investigación tal como lo dejó de manifiesto la Resolución N°27, no hubo colaboración del reclamante a la actividad investigadora de la SP, por lo que no se puede considerar este criterio para graduar la pena. La conducta de la reclamante se limitó a cumplir con su deber legal, pero no se observó una actividad proactiva que ameritara graduar la sanción por este rubro.

En cuanto al criterio de reiteración de la conducta aplicado, no pueden ser desmentidos la cantidad de casos involucrados, lo que da cuenta claramente de la reiteración de la conducta.

En cuanto a la alegación de la reclamante de que no se habría señalado de manera clara y expresa el método por el cual realizó la determinación exacta de la pena, lo que se opone al principio de transparencia, cabe considerar todo lo ya explicado respecto a los criterios que se tuvieron en consideración al imponer la sanción.

Octavo: Que, a la reclamante se le impuso como sanción una multa de 2000 UF, conforme al artículo 17 N°2 del DFL N°101 de 1980, del Trabajo, que faculta a la SP a aplicar multas de hasta en 15.000 UF.

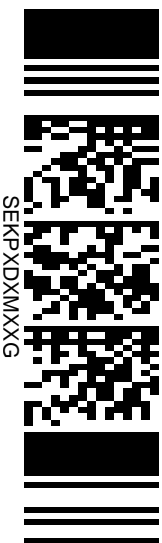
Noveno: Que, consta de autos que la sanción impugnada fue impuesta en el procedimiento que la ley regula, en el cual el reclamante hizo uso de los derechos que la ley le reconoce.



Décimo: Que, la normativa incumplida por la reclamante se enmarca en las reglas que regulan la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento; en dicho ámbito la autoridad de control goza de potestad sancionatoria para hacer cumplir la regulación vigente. En el caso de autos la reclamante efectivamente infringió las normas que motivan la multa impuesta y la reclamada a través de un acto administrativo fundado.

Undécimo: Que, sin embargo, como se dijo en motivo sexto precedente, la resolución sancionatoria ha vulnerado el principio del *Non bis in idem* por lo que se rebajara el monto de la multa impuesta, pues los tres cargos formulados en la resolución impugnada tienen su origen en un mismo hecho, a saber, la falta del certificado de oferta original, y en consecuencia, el recurso de reclamación será acogido únicamente en cuanto se accederá a rebajar la multa impuesta a AFP CUPRUM S.A. a la suma de 650 UF, no pudiendo prosperar en lo demás.

Por estas consideraciones y de conformidad, a lo que dispone el artículo 94 N° 8 del DL 3.500 y el artículo 18 del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, SE ACOGE el reclamo de ilegalidad interpuesto en favor de AFP CUPRUM S.A. en contra de la Resolución Exenta N°27 de 8 de septiembre de 2020, dictada por la Superintendencia de

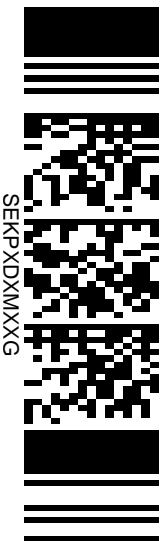


Pensiones, solo en cuanto se rebaja la multa impuesta a 650 Unidades de Fomento y se rechaza en todo lo demás.

Redactó la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

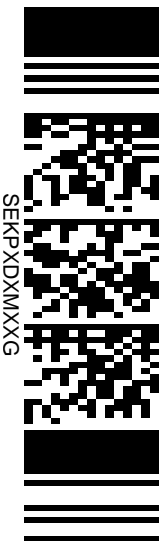
Regístrese y notifíquese.

N°Contencioso Administrativo-707-2020.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministra Suplente Maria S. Jorquera B. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a trece de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.